

Méjico al borde del abismo

Jorge G. Castañeda

“**L**a crisis mejicana es tan severa que

realmente deberíamos darle la mayor prioridad”*, señaló recientemente el exsecretario de Estado norteamericano Henry Kissinger. En efecto, este país afronta múltiples y gravísimos problemas: una deuda externa de 100 mil millones de dólares, una inflación que en este año rebasará el 100% y un desempleo que afecta a 4 de cada 10 personas. El desbarajuste económico de Méjico, conocido por el mundo solo hasta 1982, se agudizó con la reciente caída del precio internacional del petróleo, de donde proviene el 70% de los ingresos de este país. El sistema político mejicano también ha dado muestras de un deterioro progresivo, tras casi seis décadas de haber sido usufrutuado en forma exclusiva por el PRI, provocando su desprestigio entre los más amplios sectores de la sociedad.

Todos estos factores han tornado tensas y difíciles las relaciones con Estados Unidos, lo que ha motivado una honda preocupación entre la clase dirigente norteamericana, consciente de la enorme importancia de su vecino del sur. Méjico es el tercer socio comercial de la potencia del norte y cuenta con inversiones de unas 4,000 compañías de Estados Unidos.

* * *

AUNQUE LA RENOMBRADA ESTABILIDAD POLÍTICA de Méjico no ha sido minada aún por la crisis económica del país, ya no es posible seguir garantizando su perdurabilidad.

Durante los últimos cincuenta años el sistema político mejicano ha propiciado el desarrollo económico, si bien injustamente distribuido, mal planificado y marcado por el despilfarro y la corrupción. Ha garantizado la paz social y la continuidad política, aún valiéndose de una represión recurrente y a través del fraude electoral. Y ha conseguido mantener relaciones pacíficas con Estados Unidos, pese a algunas discordancias, irritaciones y confrontaciones esporádicas. Estos tres pilares de la estabilidad mejicana, única en Latinoamérica, si bien no se han derrumbado, comienzan a debilitarse como el mismo sistema político que sustentan.

Las causas de la crisis más profunda que ha afrontado Méjico en los últimos tiempos son claramente de carácter económico; este desequilibrio tiene sus raíces en el crac financiero de 1982 que, desde entonces, se ha visto agravado por el estancamiento económico, por las políticas de austeridad y por los devastadores terremotos que sacudieron a Méjico en septiembre de 1985.

II TRIMESTRE 1986

Pero la expresión más visible y aguda de la crisis es de naturaleza política. Aunque un derrumbamiento del sistema actual tendría esencialmente repercusión interna, sus consecuencias afectarían seriamente a Estados Unidos.

El Presidente Miguel de la Madrid ha debido afrontar numerosos problemas insolubles desde que asumió su cargo en diciembre de 1982: una deuda externa que en el momento asciende a cien mil millones de dólares; una caída del cinco por ciento en el PNB en 1983, sin perspectiva alguna de un nuevo resurgimiento económico; una creciente corrupción en casi todos los niveles de la vida nacional; la desilusión de todo un pueblo, que pone en duda la eficacia de sus dirigentes. Pero el reto mayor que hoy confrontan Méjico y su mandatario, es el que plantea la desconfianza general en el sistema político.

Los resultados de una encuesta llevada a cabo en junio del año pasado, publicada en el *Excelsior*, el diario más importante de Méjico, subrayan la presencia de este factor. Ante la pregunta encaminada a determinar si los funcionarios oficiales mentían o decían la verdad al asegurar que el país estaba emergiendo de su crisis económica, el 88 por ciento de los entrevistados respondió que los representantes del gobierno mentían. Igualmente, al ser interrogados sobre la posibilidad de que fueran respetados los resultados de las próximas elecciones, los encuestados, en un 55 por ciento, aseguraron que no. Sólo un 13 por ciento respondió afirmativamente.

II

LA PROLONGADA ESTABILIDAD DEL PAÍS proviene de una razonable combinación de elementos democráticos: elecciones libres, al menos en apariencia; una relativa libertad de prensa; un cierto grado de tolerancia hacia casi todas las formas de oposición; y el autoritarismo necesario para poder controlar tales elementos, expresado en el fraude electoral, en el silenciamiento de toda crítica excesiva en contra del gobierno y del presidente, en el uso de armas tales como la cooptación, la corrupción y la represión, en ese orden, para manejar a una oposición no lo suficientemente leal.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha permanecido por más de cinco décadas en el poder; pero ningún presidente ha ejercido su mandato durante un segundo periodo. El único que resultara elegido, Alvaro Obregón en 1928, fue asesinado. Por lo tanto, aunque pueden cambiar los rostros y el mecanismo de ascenso en la escala política (mientras los postulados siguen siendo los mismos), la llamada clase política ha logrado sostenerse en el mando.

Durante años, las manifestaciones de un crecimiento económico suficientemente aceptable: la creación de empleos, la distribución de tierras y los servicios sociales, han logrado que los tres ejes que sustentan el sistema

(el movimiento obrero organizado, los campesinos y los burócratas federales y locales) se muestren satisfechos, leales y políticamente apáticos. Incluso fue posible incorporar al sistema a las nuevas clases medias urbanas generadas por ese mismo crecimiento económico, en un promedio del seis por ciento anual entre 1940 y 1982. Gracias a un alto grado de movilidad social y a la fácil disponibilidad de dólares a bajo precio en el periodo anterior a 1982, se les garantizó un acceso relativamente rápido a nuevas y más opulentas formas de vida.

El país no percibió que su falta de democracia constituía un problema. Evidentemente, el PRI había triunfado en todas las elecciones de presidentes, gobernadores y senadores, y había obtenido el 95 por ciento de todas las curules en el Congreso y en los municipios, desde 1934. Pero, al no estar acostumbrados a las elecciones libres, al debate público, a una prensa crítica y a un gobierno confiable, los "Babbitts" mejicanos se limitaron a contentarse con el progreso gradual de sus patrones de vida. Prestaron muy poca atención al atraso y a la torpeza de un sistema político que chocaba, cada vez más, con una sociedad en proceso veloz de modernización.

Gracias a su mecanismo de recolección de votos en el área rural, en los estados más pobres del sur y en algunos sectores del movimiento laboral, y gracias a la burocracia federal, el partido ha triunfando, y es posible que siga triunfando, sin utilizar más medios que el de su acostumbrado fraude electoral. Méjico se ha habituado a él, en proporciones que, aunque limitadas, son evidentes en numerosas regiones; y, en otras zonas específicas, a las cifras de votos discretamente infladas o a la intimidación ante las urnas. En su totalidad, los votantes han llegado a aceptar una generosa dosis de esta "alquimia electoral", tal como la han bautizado los mejicanos, tomándola como un hecho cumplido de su vida política.

El movimiento estudiantil de 1968, que fuera reprimido con la masacre de más de 400 manifestantes, fue una de las primeras advertencias sobre el hecho de que la sociedad mejicana estaba cambiando, aunque la alarma haya sido ignorada ostensiblemente. Los gobiernos posteriores reaccionaron, durante cierto tiempo, aportando mayores elementos democráticos e incrementando el desarrollo económico. Pero deberían haberlo hecho a la inversa. Cuando en 1982, a pesar de los nuevos hallazgos petroleros y de la notable posición adquirida en lo que atañe a los créditos internacionales, los altos niveles de crecimiento económico no pudieron ser sostenidos, los métodos errados de los años anteriores volvieron a imponerse en el sistema.

El problema político de Méjico, tan poco considerado, se origina en un hecho tan sencillo como inmodificable: el sistema, que se ha mostrado tradicionalmente torpe en el manejo de la clase media, ya no puede proporcionar el crecimiento económico y la prosperidad que esa clase espera y reclama como una cuestión de rutina. Al mismo tiempo, la maquinaria del

* / Citado por TIME No. 34 de agosto de 1986, pág. 6.

1 / Personaje del Premio Nobel Sinclair Lewis: "Babbitt es un hombre de negocios de tipo medio, optimista y jovial, respetuoso de las formas y superficial por pura prudencia. Si reflexionase un poco, se rebelaría". León Thoorens, *Historia Universal de la Literatura y América del Norte*. (Daimon, 1977), pág. 334. (N. de la T.).

régimen no se cree capaz de suministrar la medida adicional de democracia que podría constituir una alternativa aceptable para esa clase media. La sabiduría política aconseja que no se debe atacar al sistema en medio de una crisis económica. Y, en ningún caso, si lo que se desea es permanecer en el poder.

Sorpresivamente, el Presidente De la Madrid alcanzó a jugar con la idea de una liberalización política en 1983, primer año en que se llevó a cabo un drástico ajuste económico. Fueron respetados plenamente los resultados de las elecciones municipales de Chihuahua, uno de los estados más ricos y modernos en la frontera del norte. Esta decisión marcó el desastre para el partido del gobierno; el Partido de Acción Nacional (PAN), formado por conservadores de clase media, de tendencias pro-norteamericanas, barrió con los siete concejos de las principales ciudades y ganó las elecciones de alcaldes tanto en Chihuahua, la capital del estado, como en Ciudad Juárez, que ocupa el cuarto lugar en importancia.

El tímido experimento democrático del Presidente fue cortado de raíz. Al año siguiente, el PRI triunfó fácilmente en los comicios municipales de Mexicali y Tijuana, dos importantes y prósperas comunidades fronterizas, así como en varias poblaciones de Sinaloa, un rico estado agrícola de la costa pacífica, y también en la ciudad central de Puebla. En igual forma, a fines de 1984, las victorias del PRI fueron proclamadas luego de las elecciones locales en las comunidades de Piedras Negras, Frontera y Monclova, en el estado limítrofe de Coahuila. Pero la oposición elevó sus protestas ante lo que consideró como un fraude masivo urdido por las autoridades; tales protestas, así como las divisiones internas locales entre los miembros del PRI, provocaron amplios brotes de violencia en Piedras Negras y Monclova. Alarmado por el posible efecto de los desórdenes y de las contiendas civiles desatadas a todo lo largo de la frontera con Estados Unidos, el Presidente de la Madrid envió al ejército a Piedras Negras. La violencia fue controlada rápidamente, pero la solución resultó quizás más perturbadora que el problema en sí mismo.

El Partido de Acción Nacional, así como la mayoría de los grupos activos de izquierda y numerosos observadores independientes, opinaron que, de haber sido respetados los resultados de las elecciones en Chihuahua, el PAN habría triunfado en casi todos los comicios. Existen varias razones válidas para asegurarlo. La región norteña de Méjico ha soportado el mayor peso de la crisis económica, particularmente en sus estados de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua. Las frecuentes y agudas devaluaciones del peso mejicano han tenido un efecto devastador en la región, cuya economía está más ligada a la de Estados Unidos que a la del resto de Méjico.

Por otra parte, el estrecho contacto de esta zona fronteriza con el país limítrofe, obliga a sus habitantes a comparar sus niveles de vida y su destino político con el de sus vecinos estadinenses. Tales comparaciones, aunque inevitables, plantean un delicado problema; tienden a estimular esperanzas irrealizables e irrealizables y a la vez, dado que el norte constituye la región más rica del país (como algunos sectores de la ciudad de Méjico) su población, más

exigente, ejerce una mayor censura contra la corrupción, la complicidad, el despilfarro y la incompetencia general que caracterizan al gobierno.

La indiferencia en las áreas urbanas se hizo evidente en las elecciones parlamentarias nacionales del 7 de julio del año pasado. Aunque los datos oficiales señalaron que el PRI había obtenido el 65 por ciento de los votos en toda la nación, las urnas contabilizaron menos del 45 por ciento en las cinco ciudades principales reunidas: la capital, Guadalajara, Ciudad Nezahualcoyotl (en las afueras de ciudad de Méjico), Monterrey y Juárez. La cuota de votos del PAN, de acuerdo con los cómputos oficiales, llegaba apenas al 15.6 por ciento en todo el territorio nacional.

Es difícil determinar cuáles hubieran sido los resultados reales de dichas elecciones, de no haberse presentado un fraude. Los analistas independientes y la mayoría de los partidos de la oposición, tanto de derecha como de izquierda, han calculado que la compeñda electoral a favor del PRI aumentó las cifras en un nueve por ciento, aproximadamente. En ese caso, la verdadera votación a su favor sería de un 56 por ciento, y no del 65, y la del PAN habría alcanzado el 22 o el 23 por ciento.

Es prácticamente imposible hacer cálculos exactos sobre las cifras fraudulentas a nivel local. De acuerdo con la mayoría de los informes, el fraude afectó principalmente a los estados norteños de Nuevo León y de Sonora, en forma tal que los resultados carecen de sentido. En siete de los ocho estados más populosos y prósperos del país (el Distrito Federal, Jalisco, el estado de Méjico, Chihuahua, Nuevo León, Baja California y Sonora), que contabilizan un 42 por ciento de la población votante registrada, el PRI obtuvo menos del 55 por ciento de la votación. Este cálculo está basado en las cifras oficiales correspondientes a cinco de los estados y a estimativos de los conservadores en lo que concierne a Sonora y Nuevo León, en donde el PAN cuenta con mayor apoyo. Podría calcularse que la cifra real de la votación a favor del Partido de Acción Nacional, en siete estados, alcanzó un 25 por ciento.

La magnitud del fraude no significa que el PRI estuviera destinado a perder necesariamente, de haberse llevado a cabo unas elecciones verdaderamente libres y justas. El punto radica en que la oposición, aunque aún minoritaria, es mayor de lo que indican las cifras oficiales en algunas áreas, pese a haber sido acomodadas con fines fraudulentos. Por otra parte, y lo que es aún más significativo, dichas cuentas indican que el PRI ha comenzado a perder su dominio electoral sobre las clases urbanas "modernizadas" y de medianos ingresos de la región norteña y, en menor grado, sobre las de la zona central.

En su conjunto, el sistema político carece ya del apoyo de los segmentos prósperos y "desarrollados" de la sociedad mejicana. Ya no es el verdadero representante del estrato social clave que comprende a abogados, médicos, contadores, oficinistas de menores ingresos, propietarios de establecimientos comerciales y algunos burócratas y trabajadores industriales locales. Quizás todos ellos están igualmente desilusionados de la actual oposición, pero también han perdido su fe en el gobierno y ya no vuelven sus ojos a Ciudad de Méjico en busca de una solución a sus problemas regionales.

De hecho, un buen número de observadores mejicanos cree detectar señales de un lento despertar en la conciencia de algunas adormecidas comunidades del norte, partidarias de mantener contactos más estrechos con Estados Unidos.

El hecho de no contar con los votos de tan importantes sectores no significa, necesariamente, que el PRI vaya a perder su ascendiente a nivel nacional como consecuencia de una derrota electoral; pero sí determina un serio debilitamiento del dominio que ha conservado durante tanto tiempo. Lo anterior pone en tela de juicio la viabilidad de un sistema en el que el monopolio del poder político sea manejado por un solo partido. Se ensancha cada vez más la grieta que separa al sector urbano del norte de Méjico, más moderno y opulento y del cual el PRI obtiene una votación pluralista escasamente mayoritaria, de la región rural del sur, más pobre y atrasada, pero que continúa proporcionando al partido entre el 80 y el 90 por ciento de la cuota electoral. El PRI insiste equivocadamente en gobernar a estos dos Méjicos tan diferentes, como si se tratara de uno solo. Como resultado, será imposible sostener esta situación intolerable sin recurrir a la coacción. Y las medidas coercitivas, en un momento dado, llevan a la intervención militar. Todo el mundo sabe cómo comienza, pero no cómo termina.

En aquellos casos en los que se haga necesario algo más que el fraude "tradicional" para garantizar el triunfo del PRI, o cuando los votantes dejen de aceptar la cuota acostumbrada de engaño electoral, el gobierno se verá cada vez más obligado a adelantarse a acontecimientos como los que tuvo que enfrentar en el caso de Piedras Negras: la alternativa de rendirse a la oposición... o de llamar al ejército en su ayuda. Cualquiera de estas decisiones es la confesión de una derrota.

III

DESDE LA DÉCADA DE 1930 las fuerzas armadas mejicanas rara vez se han mezclado en política; han respetado el régimen civil y muy pocas veces han sido llamadas para remediar el mal funcionamiento del sistema. Aunque se recurrió al ejército con el fin de solucionar ciertos problemas electorales de poca monta a comienzos de los años 60, la última vez que intervino en momentos graves de crisis fue en 1968, cuando fracasaron las negociaciones entre el gobierno y el movimiento estudiantil, dos semanas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos. A mediados de la década de 1970, las fuerzas armadas ahogaron un levantamiento guerrillero en el estado de Guerrero; pero su incursión en los asuntos políticos no pasó de los límites de la aislada región.

No parece existir peligro inmediato con respecto a mayores implicaciones del ejército en la vida política del país; pero puede presentarse en el futuro. Es evidente que los militares mejicanos son los menos afectados por el desprestigio general del régimen, que recae sobre otros sectores. De acuerdo con encuestas realizadas a mediados de 1985, cuando se preguntó a los mejicanos cuáles eran, en su opinión, los elementos de la sociedad que "mentían" ante el público más frecuentemente, un 59% de los entrevistados colocó a los políticos en primer lugar; el 26% mencionó a los funcionarios públicos

y únicamente el 2% se refirió a los militares como el elemento menos veraz del sistema. Si bien es cierto que la imagen de las fuerzas armadas pudo haber sufrido cierto deterioro durante los terremotos de septiembre del año pasado, ello se debió más a su falta de participación que a sus actos: las tropas fueron convocadas para patrullar la ciudad y evitar los saqueos, pero no se involucraron activamente en las operaciones de rescate y salvamento.

Sin embargo, y lo que es más importante, existen razones para creer que, por primera vez en muchos años, se ha creado una seria división en el seno de las fuerzas armadas y una grave desunión entre ellas y el gobierno. Según ciertas fuentes, un buen número de oficiales de nivel medio, bien instruidos y relativamente jóvenes (entre los 35 y los 40 años), muestra una particular molestia ante la actitud pasiva del gobierno; y los altos mandos militares forzaron al ejército a desempeñar un papel diligente, luego de las primeras consecuencias de los terremotos. Podría decirse que esta división marca la tendencia política de mayor trascendencia que haya surgido de la tragedia de septiembre de 1985.

La posibilidad de desórdenes se halla mucho más extendida hoy en día que durante las décadas de 1960 y 1970. En las últimas elecciones se logró evitar el estallido de serios incidentes en algunos estados potencialmente explosivos, como Sonora y Nuevo León. Aunque los disturbios no han alcanzado aún niveles alarmantes, es fácil predecir su agravamiento. La neutralidad tradicional del ejército puede ser erosionada, si el gobierno persiste en obligarlo a participar con mayor frecuencia en acciones destinadas a sofocar las manifestaciones de protesta y de violencia provocadas por todo intento, sospechoso o comprobado, de fraude electoral. Es probable que, tarde o temprano, con el fin de prevenir los actos violentos, el ejército se muestre tentado a intervenir, llegado el caso; e inclusive antes de celebrarse los comicios, si queda demostrado que toda jornada electoral desemboca siempre en desórdenes. El círculo vicioso constituido por el fraude, la violencia y la intervención militar, pudo ser evitado en 1985; pero aún no han desaparecido las presiones capaces de hacer detonar su mecanismo en cualquier momento. De allí los temores que siguen abrigando todos los sectores, especialmente en la proximidad de las elecciones, como se hizo evidente en vísperas de las de gobernadores del estado de Chihuahua en julio del año pasado.

No parece haber una solución realista y a corto plazo para la crisis política de Méjico. La alternativa de revisar el sistema y de conceder a la clase media del norte el equivalente de una "autonomía" de corte democrático, a cambio de la prosperidad económica de que gozó anteriormente o de aquellas reformas que el país necesita pero que no puede realizar de la noche a la mañana, constituye una opción aconsejable pero difícil de llevar a cabo en su totalidad. Las fuerzas centrifugas del norte, los temores tradicionalmente alimentados por un Méjico que recela de una división internacional inspirada por Estados Unidos, y el riesgo real o imaginado de perder el control sobre un proceso de liberalización política sin precedentes, impiden la puesta en marcha de tal alternativa. Sólo la acción audaz y creativa de un gobierno decidido podría prevenir una caída a largo plazo, corriendo el riesgo inmediato del derrumbe político. Pero el sistema mejicano no parece estar aún listo para enfrentar tal desafío.

No obstante, es posible detectar indicios reconfortantes de cambio, que van surgiendo del fondo a la superficie. La explosión de solidaridad, de responsabilidad cívica y de colaboración ciudadana que mostró la sociedad mejicana a raíz de los terremotos de 1985, ha contribuido a una naciente democratización de las instituciones políticas del país. Esta hipótesis no deja de ser bastante especulativa por el momento, aunque ya ha sido expresada por algunos de los analistas más sagaces, como Carlos Monsivais, destacado cronista de la devastación de Ciudad de Méjico. Han surgido, como consecuencia de la catástrofe, algunas organizaciones populares y movimientos patrocinados por la izquierda, entre los sectores más afectados que perdieron sus hogares o debieron enfrentar la muerte de sus familiares. Estas señales embrionarias de conciencia política podrían llegar a evolucionar en asociaciones políticas de tendencias de izquierda, realmente independientes de la acción del gobierno.

Mientras los observadores mejicanos y extranjeros se dedican a criticar severamente la debilidad de un sistema político aparentemente incapaz de vivir en conformidad con una fuerte oposición, su censura, en cierto sentido, reviste poca importancia si ha de tenerse en cuenta la situación económica del momento. Es fácil hacer concesiones cuando ellas están amparadas por la prosperidad; los dirigentes nacionales no soltarán las riendas del poder, a menos que consigan llevar a cabo el proceso en forma poco dolorosa, a través del desarrollo económico. No obstante, si fuera posible lograr tal desarrollo, la necesidad de realizar un cambio político dejaría de ser tan penitencia.

Los adelantos democráticos, tan dispersos como poco trascendentales que ha conocido el sistema político mejicano durante los últimos cincuenta años, se han presentado únicamente en momentos de extrema tensión (como en el período de la Gran Depresión y a raíz del movimiento estudiantil de 1968) o en el apogeo de un espectacular crecimiento económico (en el caso de la bonanza petrolera entre 1978 y 1981). Pero las condiciones actuales difieren enormemente y, puesto que el régimen político es aún más débil que antes y no se vislumbra en forma alguna vez en años registró un crecimiento nulo. La situación empeoró en 1983: el PNB descendió en un 5.3 por ciento y el ingreso per cápita disminuyó en el ocho por ciento. 1984 trajo un crecimiento del 3.5 por ciento, pero a un alto precio: el de una nueva recesión en

IV

UNICAMENTE ENFRENTANDO LAS DIFICULTADES ECONÓMICAS del país en forma adecuada y duradera, podría lograrse una liberalización del régimen político. A pesar de la leve y efímera recuperación alcanzada a fines de 1984 y comienzos de 1985, la economía mejicana ha permanecido en el estancamiento desde 1982, cuando por primera vez en años registró un crecimiento nulo. La situación empeoró en 1983: el PNB descendió en un 5.3 por ciento y el ingreso per cápita disminuyó en el ocho por ciento. 1984 trajo un crecimiento del 3.5 por ciento, pero a un alto precio: el de una nueva recesión en

1985, cuando la economía mostró un aumento de escasamente el uno por ciento durante todo el año. Aunque no ha sido aún determinado el costo de la reconstrucción de Méjico después de los terremotos, la sola reedificación de las viviendas de quienes perdieron su hogar, la reparación del sistema de agua potable de la capital, severamente dañado, y la renovación y reemplazo de la destruida red de telecomunicaciones y de las instalaciones médicas, ascenderá fácilmente a miles de millones de dólares.

El programa de ajuste económico puesto en práctica por el Presidente de la Madrid (bajo convenio con el Fondo Monetario Internacional) ha permitido a Méjico el pago de los intereses de su deuda externa, pero a costa del sacrificio de su anterior prosperidad económica. Lamentablemente, muy pronto será demasiado alto para Méjico el precio de este trueque.

El país ha realizado en ormes esfuerzos y ha alcanzado algunos resultados espectaculares en su intento de poner orden a sus finanzas domésticas. Los gastos deficitarios como porcentaje del PNB se redujeron del 18% en 1982, a 6% en 1984. El tradicional déficit comercial de la economía mejicana se invirtió en forma tal que, en 1983, por primera vez en su historia, el país pudo gozar de un superávit de casi 14 millones de dólares. El caso se repitió en 1984. La inflación, que había constituido la gran preocupación del gobierno y del FMI, detuvo su desbocada carrera que le había llevado a un nivel del 100 por ciento en 1982, para descender a un manejable 80 por ciento en 1983 y al 59 por ciento en 1984. Como consecuencia del control ejercido durante largo tiempo sobre el movimiento obrero, lo anterior se llevó a cabo sin desórdenes sociales significativos, con excepción de algunas huelgas de poca monta; no se presentaron disturbios urbanos, ni la toma de tierras en el sector campesino.

Pero ya no le queda tiempo al Presidente Miguel de la Madrid para sanear la economía mejicana. Aún sin el desastre del terremoto, la inflación en 1985 habría vuelto a alcanzar los mismos niveles de 1984; pero como consecuencia del sismo, mostró un aumento. Las políticas ortodoxas destinadas a lograr un ajuste económico son necesariamente limitadas; y no se han puesto en práctica otros métodos más atrevidos. El severo programa de austeridad ha golpeado el nivel de vida de la mayoría de los mexicanos. El salario real ha disminuido en un 50 por ciento durante los últimos tres años. Las importaciones, especialmente en lo que respecta a los bienes intermedios y de capital, de los cuales depende la economía para su desarrollo, muestran un descenso cercano al 65 por ciento en relación con los niveles alcanzados en 1981. Aunque el gobierno y el sector empresarial han tratado de evitar los despidos masivos, los 800.000 nuevos empleos que necesita el país para ir al paso con el aumento de la fuerza laboral, no han sido creados.

El verdadero cuello de botella de la economía sigue siendo la deuda externa. Cuando el Presidente de la Madrid tomó posesión de su cargo, la obligación ascendía a 85 mil millones de dólares; hoy en día representa 100 mil millones. Su amortización, pese a los progresos obtenidos en cuanto a las condiciones de pago, se ha convertido en una carga intolerable para la nación mejicana.

Es cierto que la comunidad financiera internacional ha aceptado nuevos planes de amortización a varios años, lo que permite a Méjico volver

a programar los principales pagos de la mitad de su deuda en un plazo de catorce años. Pero estos acuerdos tan anunciados sólo atañen al capital; los intereses no han sido incluidos en los arreglos. Tanto los banqueros como quienes administran las finanzas en Latinoamérica, saben desde hace tiempo que muy pocas naciones podrán pagar todo lo que deben. El problema de la deuda externa de la región radica realmente en los intereses, cuyo pago parece ser de dudoso recaudo por parte de los acreedores.

En ese respecto, Méjico ha sido favorecido por la reciente caída de las tasas de interés: cada punto de declinación en las preferenciales ("prime rates") representa para el país un ahorro de 800 millones de dólares, aproximadamente. Pero las tasas reales se mantienen aun en niveles sin precedentes, y la cancelación de la deuda mejicana en 1984 totalizó unos 14 millones de dólares, prácticamente la misma suma que debió ser desembolsada en 1985, lo que equivale al 55 y al 60 por ciento de las exportaciones de Méjico. Sencillamente, no queda en las arcas el efectivo suficiente para cubrir las importaciones que exige la reanudación de un constante crecimiento económico.

Tampoco podrá obtener Méjico los fondos necesarios en los mercados internacionales de crédito; y, de llegar a recibir tales fondos, ello sólo conseguiría hacer más complejo el dilema que le plantea el pago de su deuda externa. Es evidente que ni siquiera la nueva estrategia planteada en octubre de 1985 por James Baker, el Secretario de Hacienda norteamericano, en lo que concierne a la deuda internacional, y que demandaría mayores préstamos por parte del Banco Mundial y de las entidades bancarias comerciales, conduce a la solución directa del problema clave: el cumplimiento de las deudas mejicanas devora gran parte de sus ingresos en moneda fuerte. Cualquier préstamo adicional, de ser posible, sólo conseguiría dar largas al asunto, sin solucionarlo.

Contribuye a hacerlo más insoluble otra circunstancia fundamental: la evasión de capitales. Teniendo en cuenta que algunos mejicanos tienen en su poder más de 50 mil millones de dólares representados en instrumentos financieros norteamericanos, es evidente que hay que encarar el asunto si se intenta buscar una solución a largo plazo. Ningún país está en capacidad de soportar un desangramiento constante de sus activos como el que ha tenido que afrontar Méjico en los últimos años.

Las recientes bajas de los precios del petróleo, que equivalen al 75 por ciento de las divisas extranjeras que ingresan a Méjico, han empeorado su situación. Un colapso mayor (posibilidad que no puede ser descartada), implicaría indudablemente la quiebra total de la nación. El recurso de apelar a la inversión extranjera, para tratar de compensar la tasa tradicionalmente baja del ahorro interno, implicaría una serie de forzadas y tortuosas decisiones. Aunque el Presidente de la Madrid ha identificado las alternativas, aún no se ha decidido por ninguna. A mediados de 1985 fueron anunciadas algunas medidas destinadas a modernizar y liberar la economía; pero no pasan de ser tímidos pasos que apenas se insinúan en esa dirección.

Tanto los empresarios como los economistas progresistas consideran que la economía mejicana se ha convertido en pesadilla como consecuencia de cuarenta años de proteccionismo y de ineficacia, debido al subsidio ma-

sivo, tanto de los productos y materias primas de consumo como de los insumos industriales, a lo que habría que añadir el atraso tecnológico. Y ha sido obstaculizada por excesivas trabas y papeleos de todo orden y en todas las actividades, desde la inversión extranjera, las licencias de importación y los impuestos a la exportación, hasta lo que concierne a la tenencia de tierras. Si bien hay un reconocimiento general en cuanto a la naturaleza y gravedad de los problemas y se hace evidente la necesidad de encararlos para salvar la economía nacional, sorprende la notoria falta de consenso en lo que respecta al momento, la forma y el orden en que deben ponerse en marcha las reformas por las que está clamando el país entero.

V

LOS OBSTACULOS QUE IMPIDEN LAS REFORMAS SON, ante todo, de carácter político. Es claro que el gobierno no cuenta con una base sólida de apoyo para llevar a cabo los cambios estructurales que, a corto plazo, impondrían una situación de escasez, dificultades y privaciones sobre diversos sectores de la sociedad mejicana. Por otra parte, el flanco izquierdo del Presidente de la Madrid no está lo suficientemente resguardado como para permitirle emprender cambios que puedan ser vistos por muchos como soluciones conservadoras y pronorteamericanas, lo que le representaría un grave quebranto político.

El gobierno, la mayor parte del sector empresarial, un buen número de banqueros y de inversionistas extranjeros y algunos analistas mejicanos independientes, han llegado a la conclusión de que la única forma de modernizar la economía del país implica la puesta en marcha de reformas trascendentales, que van contra la corriente de la historia y de las políticas económicas más recientes en los anales de Méjico. Por lo tanto, la reducción significativa de los subsidios al consumidor (especialmente en lo que respecta al transporte y a las materias primas y productos alimenticios básicos, y a la industria (insumos tales como la energía, las materias primas importadas, las tierras y el agua) ha llegado a ser una medida inevitable, puesto que los dineros que continúan financiando tales subsidios ya no se encuentran disponibles.

Se hace necesario igualmente el recorte del sector económico de propiedad del estado. En el transcurso de los años éste se ha convertido en un sistema disfrazado, y muy costoso, de bienestar social y de seguro contra el desempleo, que amortigua el impacto de la realidad económica mediante la toma de compañías con problemas financieros, las subvenciones excesivas ofrecidas a trabajadores en empresas más sanas o estratégicas del sector público y la inercia burocrática. Si tales prácticas fueran reconocidas abiertamente como factores de un sistema benefactor, podrían ser defendidas. Pero, al no ser confesadas como tales, no existen razones para mantenerlas frente a la presente impotencia económica.

El mismo razonamiento puede aplicarse a la tradición proteccionista de Méjico, de más de cuarenta años. Un complicado sistema basado en licencias anticipadas de importación, impedimentos y papeleos, barreras tarifarias y no tarifarias, ha mantenido a la industria mejicana muy bien aislada

de la competencia extranjera. Sin lugar a dudas, ello ha contribuido enormemente a la sustitución de las importaciones y al desarrollo de las modernas plantas industriales del país. Pero ha creado igualmente una industria nacional que, por lo general, produce bienes de baja calidad y alto precio, y que no se encuentra en absoluto preparada para fomentar un desarrollo orientado hacia la exportación, todo lo cual ha dado pie a un lánguido retraso tecnológico. Méjico ya no puede permitirse el lujo de seguir subsidiando, a través de un sistema inflacionario carente de competencia, a un sector industrial inepto que se ha mostrado incapaz de generar ingresos por cuenta de sus exportaciones, reduciendo así los costos domésticos y suministrando productos aceptables únicamente dentro del mercado interno.

En forma similar, el sistema de tenencia de tierras necesita ser reexaminado. Desde la revolución mejicana, el *ejido*, que consiste en la posesión y utilización individual del suelo sin títulos de propiedad o de compraventa y sin derechos de herencia, ha tenido un papel importantísimo en el mantenimiento de la paz social en las zonas campesinas, tradicionalmente violentas. El costo económico, sin embargo, ha sido muy elevado: con excepción de las cosechas de algunos estados norteros y del centro, la agricultura mejicana y las inversiones en el área rural han permanecido en un largo estancamiento de años. A su vez, esta situación ha desembocado en un alza desmedida de la cuenta de importaciones de alimentos. Desde un punto de vista estrictamente económico, la solución más obvia radicaría en la eliminación del *ejido*, abriendo así la puerta a un mercado más libre en la agricultura mejicana para las tierras, la inversión y la fuerza laboral. Pero los costos políticos y sociales que conllevaría la erradicación de la mayoría de la población rural allí arraigada, serían astronómicos. Ningún gobierno se ha atrevido hasta ahora a realizar intentos o a improvisar medidas con la institución del *ejido*. El fin del período presidencial de Miguel de la Madrid está demasiado cercano y ya no dispone del tiempo necesario para acometer una empresa de tanta trascendencia.

Por último, las leyes de Méjico sobre inversiones extranjeras, que por lo general exigen que el 51 por ciento del capital sea de propiedad de los nacionales, tendrán que ser modificadas si el país tiene la intención de reemplazar los créditos externos por una participación internacional equitativa. Desde los años 40, Méjico ha sido el puerto de abrigo de numerosas compañías internacionales, puesto que ofrece un amplio mercado interno, una mano de obra tan idónea como económica, una infraestructura desarrollada y la ventaja de su cercanía con Estados Unidos. Sin embargo, los inversionistas potenciales se han visto desalentados por los cambios desfavorables en lo que eufemísticamente se dio por llamar "las reglas del juego" en la década de 1970, por la inesperada nacionalización de los bancos privados en 1982 durante la administración del Presidente José López Portillo, y por la incertidumbre general con respecto a la salud de la economía mejicana.

Son por demás muy complejos los problemas relacionados con la inversión directa: Méjico está intentando atraer a diferentes clases de inversionistas de distintos sectores, tales como empresas pequeñas y medianas con un alto potencial para exportar o transferir tecnología, anteponiéndolas a

las grandes compañías que durante largo tiempo dominaron el ámbito de la inversión local. Los incentivos que anteriormente lograban conquistar a esas grandes compañías resultan pobres y escasos para sus contrapartes más modestas, especialmente en los difíciles momentos actuales. Méjico espera obtener más de 2.000 millones de dólares anuales en ingreso neto de divisas a través de la inversión extranjera, pero aparentemente no lo conseguirá sin modificar, en forma drástica, las leyes vigentes. En un acuerdo celebrado en julio de 1985, destinado a permitir a la IBM la construcción de una planta de computadores en el país, el gobierno mejicano mostró cierta flexibilidad en su interpretación de la legislación, al autorizar que la firma extranjera conservara la propiedad total del contrato. Sin embargo, esa flexibilidad probablemente no bastará para ofrecer mayores estímulos a las inversiones esperadas.

Por lo tanto, todas esas reformas siguen presentando los mismos inconvenientes: son políticamente costosas, desestabilizan la economía a corto plazo, exigen largos preámbulos y tienden a deslucir la imagen progresista y nacionalista del gobierno. El sistema mejicano ha mantenido la costumbre de realizar cambios cuyas consecuencias son totalmente opuestas: resultan políticamente ventajosos, económicamente indolores, beneficiosos a corto plazo, y concuerdan plenamente con la retórica tradicional del régimen. Si cada reforma ha de tener un precio tan elevado, el costo de todas ellas sería prohibitivo.

La taimada burocracia mejicana luchará a brazo partido contra toda innovación que amenace con menoscabar sus investiduras y privilegios, posibilidad que plantean las reformas propuestas. Por otra parte, la modernización económica impone también la modernización social. Tanto el movimiento obrero mejicano como las relaciones entre patronos y trabajadores, tendrán que cambiar. Si, por ejemplo, llegaran a ser perturbadas las corruptas organizaciones sindicales manejadas por el estado, los líderes gremiales no serían capaces de seguir garantizando la paz laboral en los campos petroleros. Asimismo, cualquier disminución drástica en el poder adquisitivo de los salarios, como la que fuera impuesta desde 1982, no sería aceptada tan sumisamente en el futuro. No debe sorprender, por lo tanto, que la administración del Presidente Miguel de la Madrid se haya limitado a insinuar apenas unos tímidos pasos en una dirección que se impone como necesaria pero que, políticamente le resulta muy incómoda.

Es de presumir que el mandatario podrá enfrentar las tormentas que surjan de las reformas económicas, únicamente si decide avanzar simultáneamente en la otra línea de batalla: la deuda externa de Méjico. Si ha de tomar las medidas tendientes a abrir la puerta de Méjico al mundo, su gobierno debe mostrar igualmente que puede hacerle frente a los bancos internacionales, al Fondo Monetario Internacional y a los Estados Unidos. Es decir, una cosa por otra: sin esta condición, es difícil que los mejicanos acepten los riesgos de una reestructuración económica. Y únicamente reduciendo drásticamente los pagos de intereses sobre su endeudamiento externo, podrá financiar la administración el desarrollo que necesita el país para hacer políticamente posibles tales reformas.

Los líderes mejicanos deberán estar dispuestos a realizar un acto de equilibrio bastante delicado. Tendrán que procurar que el pago del servicio de su deuda, equivalente al 55-60 por ciento de sus ingresos por exportaciones, descienda aproximadamente al 25 por ciento durante un período fijo y considerable de tiempo. A la vez, deberán abstenerse de adquirir obligaciones adicionales (como las que implicaría un exceso de intereses, por ejemplo) o de destruir la posibilidad de obtener nuevos préstamos externos. Más aún, el cumplimiento de las condiciones anteriores requeriría del pleno apoyo de las potencias financieras internacionales, sin que llegara a presentarse una cesación unilateral de los pagos, lo que llevaría a Méjico a una situación autárquica y provocaría su enfrentamiento con Estados Unidos. Satisfacer esta necesidad dual, tanto de pagar menos como de recibir más, será difícil, tal vez imposible; pero de todas formas no será más complicado que cumplir con cualquiera de las exigencias del frente doméstico. La solución duradera al problema de la deuda externa es una condición indispensable, aunque no basta para realizar el cambio político y económico del sistema mejicano.

VI

LAS RELACIONES ACTUALES ENTRE MEJICO y Estados Unidos son otro de los muchos obstáculos que es necesario superar. Tradicionalmente, el asunto ha sido dejado de lado por los mejicanos en su agenda de problemas por resolver. Estas relaciones han sufrido diversos cambios con el paso del tiempo, de conformidad con las tendencias de los gobiernos y las dificultades del momento. Pero, descontando la habitual discordancia existente entre los dos vecinos, sus vínculos no han significado mayores dolores de cabeza para ninguno. Sin embargo, esta situación ha cambiado radicalmente en los últimos años.

Hoy en día, una de las mayores preocupaciones del Presidente Miguel de la Madrid gira alrededor de los problemas causados por la pertinaz y abrasiva insistencia de la administración Reagan, muy comentada por los mejicanos, sobre la necesidad de un cambio drástico en las políticas tanto internas como externas de Méjico. Recíprocamente, la incesante crisis económica de la nación mejicana, y su creciente malestar político y social, inquietan profundamente a Estados Unidos. Ambos países se han visto obligados a mantener su posición: ninguno podría modificar su actitud sin correr el riesgo de lesionar, en cierta medida, sus intereses nacionales; pero, obviamente, el más profundamente afectado es Méjico.

Sus dificultades mutuas resultan fácilmente identificables, tanto aquellas que tienen que ver con la inmigración ilegal de mejicanos a Estados Unidos, el tráfico de drogas en Méjico, el problema de la seguridad de los turistas norteamericanos, las leyes sobre inversión extranjera o los subsidios comerciales, como las que plantean conceptos más abstractos: tal es el caso de "la democracia mejicana". Diversos sectores de la sociedad de Méjico han llegado a la misma conclusión que los norteamericanos con respecto a los cambios que se impone llevar a cabo. Pero, unánimemente, todos los

funcionarios oficiales, los empresarios, los intelectuales y los periodistas mejicanos consideran que la presión de Estados Unidos, independientemente de sus efectos inmediatos, no sólo no contribuye a la realización de las reformas necesarias, sino que, en la medida en que en sí misma es un problema, se ha convertido en el principal obstáculo para efectuar un cambio significativo. Es muy poco lo que puede emprender Méjico sin el apoyo de sus vecinos del norte; pero mucho menos aún, si tal apoyo representa una abierta intrusión.

Una de las mayores dificultades surge del poco éxito de Estados Unidos en sus esfuerzos tendientes a evitar que Méjico continúe prestando su apoyo a los revolucionarios de Centroamérica y el Caribe. Es cierto que ha habido algunos resultados positivos: Méjico ya no abraza la causa de la revolución en la cuenca del Caribe, y se han agriado las estrechas relaciones que mantenía anteriormente con los sandinistas de Nicaragua. Pero, teniendo en cuenta que el Presidente Miguel de la Madrid ha ido perdiendo la imagen de estadista progresista y nacionalista que todo mandatario mejicano está obligado a exhibir, hoy comienza a encontrar enormes dificultades en todo aquello que conduzca a hacer concesiones a Estados Unidos en campos diferentes, así como en la puesta en práctica de políticas internas y económicas que muchos consideran conservadoras y pro-norteamericanas.

La presión de la administración Reagan es vista como una actitud hipócrita y carente de sensibilidad, puesto que su forma de abordar los asuntos, así como la selección del momento y de la intensidad requerida para ejercer dichas presiones, tienen un sentido impenetrable para la mentalidad, las tendencias y las costumbres de los mejicanos. Por lo tanto, cuando Méjico enfrentaba graves problemas de otra índole a comienzos de 1985, sus vecinos provocaron una confrontación más seria aún a raíz del asesinato de un funcionario norteamericano de la organización antinarcóticos, la Drug Enforcement Agency. Estados Unidos se quejó de que el gobierno azteca mostrara tan poco cuidado en el manejo del caso: si bien consideraba lamentable la muerte de Enrique Camarena, su desaparición no era más dolorosa que la de 300 oficiales mejicanos que habían perdido la vida en la lucha contra el narcotráfico.

Méjico no está acostumbrado a ser el centro de la atención general. Le ha costado mucho trabajo el hacer frente al interés de otros países en sus asuntos internos, independientemente de las razones que guíen dicho interés. Es indudable que la preocupación de Estados Unidos, expresada a nivel oficial o a través de la prensa, es una circunstancia a la que Méjico deberá amoldarse; pero necesita tiempo para hacerlo. La extensa y exagerada cobertura periodística que se dio, por ejemplo, a las elecciones parlamentarias y de gobernadores del 7 de julio del año pasado, no tenía precedentes. Nunca habían sido expuestos a un examen tan profundo los métodos electorales tan peculiares de la nación mejicana. Quizás, a largo plazo, ello puede resultar beneficioso para el país; pero, en el momento presente, provoca un gran desasosiego entre los miembros de la administración y en el sector de la opinión.

Definitivamente, el papel de Estados Unidos en el intrincado drama mejicano es muy delicado y, en cierto sentido, paradójico. Por un lado no

puede dejar de reconocer la importancia de Méjico en lo que respecta a sus propios intereses; pero, por otra parte, debe comprender que puede hacer muy poco para influir positivamente en el curso del acontecer político de sus vecinos.

Ya no queda ninguna duda de que Méjico enfrenta gravísimos problemas: su sistema político, si no agotado aún, está llegando al límite de sus fuerzas; su situación económica, en lugar de mejorar, continuará deteriorándose; y sus relaciones con Estados Unidos seguirán tensas y difíciles. Una vez perdido el control de las circunstancias, los primeros afectados por el cambio serían los norteamericanos. Argumentos tan repetidos como la amenaza de un giro hacia la izquierda, de subversión o de un contagio de la crisis centroamericana, no son más que el producto de la imaginación ultracconservadora de Washington, y no tienen nada que ver con la actual situación de Méjico. El verdadero peligro radica en el derrumbamiento del sistema tradicional de mantener la paz social, la estabilidad política y el desarrollo económico en la nación mejicana; de llegar a ocurrir gradualmente, o en forma súbita, no existiría antídoto alguno para ponerle remedio fácilmente.

La inestabilidad mejicana pondría en juego importantes compromisos con Estados Unidos. Las repercusiones de una caída del sistema, entre muchas otras y en términos generales, significarían un flujo masivo de inmigrantes ilegales empujado no solamente por la depresión económica sino por el caos político, así como grandes dificultades para los 275.000 ciudadanos norteamericanos actualmente residentes en Méjico. Por otra parte, se verían en peligro los bienes y activos de sus consulados y organismos oficiales, provenientes de sus inversiones e intercambios comerciales.

Pese a todos los riesgos, y por más desinteresada o bien intencionada que fuera, toda intervención de Estados Unidos sólo conseguiría enredar aún más el curso de los acontecimientos. Si la administración juega sus cartas buscando otras alternativas para el actual sistema político o para la pacífica transición a un nuevo estilo de régimen, sólo logrará debilitar a las autoridades que hoy ejercen el poder en Méjico, lo que, a su vez, precipitará su colapso. Pero, obviamente, si los norteamericanos se limitan a observar pasivamente el deterioro de la situación mejicana, su indiferencia puede ser igualmente peligrosa. Además del precio político que forzosamente tendrían que pagar, se verían obligados más tarde a preguntarse qué habría ocurrido si hubiesen actuado en forma diferente. Sin embargo, en este caso, toda acción por parte de Estados Unidos sería más costosa que provechosa.

Existe únicamente una excepción: en lo que respecta a la deuda externa, se impone la ayuda pronta y oportuna de Washington si su apoyo es requerido y en el momento en que le sea solicitado; y es evidente que su asistencia es necesaria en este caso. No obstante, en aquellos asuntos que Méjico considera estrictamente domésticos, sus vecinos deben conservar una discreta distancia y mantener la estricta decisión de no intervenir en la vida política mejicana, olvidándose de los riesgos; y, por fuerte que sea la tentación, absteniéndose de aconsejar, sugerir o imponer soluciones.

Sin lugar a discusión, Méjico podrá superar su presente crisis únicamente si se cumplen, casi simultáneamente, cuatro condiciones igualmente importantes:

Ante todo, la modernización económica del comercio exterior, de la inversión extranjera, del sector propiedad del Estado, de los subsidios y de la tenencia de tierras, proceso que deberá ser efectuado forzosamente y a la mayor brevedad posible.

En segundo lugar, se impone una solución substancial y duradera que alivie prontamente el servicio de la deuda externa, ojalá en el transcurso de este año. Su cubrimiento debe limitarse a un 25 por ciento de los ingresos por exportaciones, de modo tal que no perjudique, en forma irreparable, las oportunidades futuras del país de recibir nuevos créditos.

Aunque Méjico no está gobernado por una dictadura, es evidente que no reina en la nación la democracia que todos sus habitantes desean; ello exige una profunda revisión de sus instituciones políticas y de su estructura social, para atender las demandas del pueblo.

Finalmente, Méjico debería retomar las riendas de una política exterior de carácter altamente nacionalista y progresista con respecto a Centroamérica y el Caribe, sin impedimento alguno por parte de Estados Unidos. Los mejicanos tienen muchos intereses en la región y deben continuar defendiéndolos. Una acción política planteada en esos términos fortalecería a la nación mejicana y le proporcionaría los medios para satisfacer las demás condiciones.

La nueva nación que habrá de emerger de sus dolorosos momentos actuales y de su esfuerzo por renacer, no tendrá los mismos rasgos de la que han conocido los mejicanos y gran parte de sus vecinos norteamericanos; pero, probablemente, será mejor para todos. Antes de que ello ocurra enfrentará grandes riesgos y, muy frecuentemente, las circunstancias, las apariencias y la percepción de las cosas, darán la falsa impresión de que el país está a punto de derrumbarse o ha caído en la anarquía. Estados Unidos, su gobierno, su prensa y todos aquéllos a quienes puedan preocupar los acontecimientos que se presenten al sur de su frontera, necesitarán una alta dosis de calma... y nervios de acero. Pero deben recordar que ésta no es la primera vez que Méjico se encuentra al borde del abismo y tener presente que siempre ha conseguido salvarse a tiempo. También en esta oportunidad podrá hacerlo.

Foreign Affairs Vol. 64 No. 2